Juliana Ströbele-Gregor

Globalización y cultura: la dinámica del derecho. Comentarios e hipótesis

El tema del derecho/derechos humanos, y los ámbitos jurídicos que se refieren a los derechos indígenas y los derechos de la mujer, son especialmente idóneos para una reflexión sobre la interacción entre globalización y culturas locales. Pues, por lo menos en Latinoamérica, la reivindicación de los derechos humanos universales ha desplegado dinámicas específicas en estos ámbitos jurídicos. Éstas son el resultado de la experiencia de la violencia ejercida por los grupos dominantes (de las clases y culturas dominantes frente a la población indígena; de los hombres frente a las mujeres en estructuras patriarcales), así como de la opresión, marginación y la consecuente exclusión del poder de decisión, y las múltiples resistencias frente a ello. Esto incumbe a la lucha tanto de los pueblos indígenas, como de organizaciones de mujeres a favor de los derechos ciudadanos y la igualdad de género. Por otro lado, se ha impulsado continuamente iniciativas de las Naciones Unidas a favor de los derechos humanos y de los derechos de la mujer, congresos y convenios internacionales, así como declaraciones internacionales sobre los derechos indígenas o sobre los derechos de la mujer.¹ De esta manera, existe una comunicación dinámica y orientada a la acción entre representantes del debate globalizado y representantes hombres y mujeres de culturas regionales. En el caso del cabildeo, son feministas y grupos de mujeres de diferentes orientaciones los que entablan un diálogo con representantes mujeres locales y regionales;

1 Respecto a los derechos de la mujer, hay que mencionar especialmente la Convención CEDAW de la ONU y la Convención de la OEA, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 1993 en Viena y la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing 1995, así como las diferentes resoluciones y compromisos gubernamentales promulgados. Respecto a los pueblos indígenas, se trata en primer lugar del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas; las declaraciones de la ONU (1993) y la Década de los Pueblos Indígenas 1994-2004 declarada por las Naciones Unidas, que ha sido prolongada diez años más; la Declaración de los Derechos Indígenas de la OEA de 1995 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas de septiembre de 2007.

en el caso de los pueblos indígenas se trata de profesionales en antropología y ciencias sociales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y sobre todo de representantes de los movimientos indígenas, que cada vez se difunden y se fortalecen más. Esta comunicación ha logrado una influencia fuerte y persistente en la escena internacional.

Del mismo modo, el debate y la comunicación internacional entre el nivel internacional y el nivel regional a través de la globalización, tienen efectos y consecuencias en los niveles locales. Por lo tanto, en el campo temático derecho – derechos humanos en el contexto de la globalización no solamente se ha desarrollado una difusión de discursos y valores culturales dominantes occidentales, sino que también se produjeron múltiples interacciones de debates en dicho ámbito a nivel horizontal, en las que están integradas y participan comunidades locales. De ello ha resultado –por lo menos en lo que respecta a los pueblos indígenas de Latinoamérica– una discusión animada y también controvertida, que a su vez influye en la reconstrucción de normas y prácticas culturales en el ámbito del derecho.

1. Ejemplo I: debate jurídico indígena

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) apoya de manera decisiva la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Entre éstos se encuentran los derechos a la tierra y al territorio, el acceso a la educación y a la salud, incluyendo la propia cultura y práctica, etc. y, particularmente, el reconocimiento de los sistemas y de la práctica jurídica “tradicional”. En la mayoría de los Estados latinoamericanos, las organizaciones indígenas aprovechan la difusión del Convenio 169 de la OIT para legitimar sus demandas ante el Estado: el reconocimiento de las culturas indígenas, sus lenguas, modos de vida, sistemas y prácticas jurídicas locales, el derecho al territorio y a la participación en el Estado. Doce gobiernos latinoamericanos han ratificado el Convenio de la OIT, con lo cual se han comprometido a reformar y adecuar sus legislaciones. El hecho de que en la mayoría de los Estados signatarios la implementación de las leyes sea más bien deficiente, es un motivo del persistente debate político sobre este tema entre las organizaciones indígenas. Y si en un primer momento las exigencias estuvieron formuladas de forma muy general, posteriormente éstas fueron especificadas y diferenciadas cada vez

más, y fueron presentadas en el lenguaje del derecho formal. La demanda de los indígenas por la autonomía jurídica y la negociación con el Estado respecto a qué ámbitos jurídicos deben ser subordinados al sistema jurídico respectivo, ha conducido a una mayor diferenciación de los discursos culturalistas por parte de los indígenas. Esto está acompañado de la reconstrucción y parcialmente de la construcción (“invención”) del derecho indígena “tradicional”. El hecho de que a menudo y de diferentes maneras se trate de un amalgama de usos y costumbres locales, que contienen influencias del derecho y de las prácticas jurídicas coloniales, así como del sistema jurídico positivo nacional (como lo ilustran estudios de campo en Bolivia: Orellana H. 2004), no afecta la argumentación culturalista. La reconstrucción del derecho indígena es un elemento importante en el proceso de la construcción de la etnicidad.

Por parte del Estado, la exigencia del reconocimiento de la práctica indígena local como “derecho tradicional” (Ley Consuetudinaria) ha llevado a que éste examine de manera más detenida esas prácticas y normas legales, con el objetivo de definir exactamente cuál es la relación entre el derecho positivo nacional y el derecho indígena (por ejemplo, investigaciones realizadas por encargo del Estado en Bolivia, Perú y Ecuador). Pero también la cooperación internacional se ha dedicado a este objeto de investigación (Brandt/Franco Valdivia 2006). Se trata de definir y debatir los ámbitos jurídicos en los que el derecho indígena puede ser aplicado, de definir y debatir qué mecanismos culturales de conciliación y de sanciones de la jurisprudencia se deben reconocer, para posteriormente establecer los límites de esta jurisprudencia y sus competencias.

Si bien en todos los países latinoamericanos que han iniciado las reformas legales respectivas, el derecho internacional y las convenciones internacionales forman el marco del ejercicio de la práctica legal indígena y pese a que, por lo tanto, los derechos humanos y los derechos ciudadanos constituyen un derecho superior, con excepción del caso de Colombia (Kuppe 2000), existen a mi parecer aún problemas no resueltos en este ámbito. Esto concierne, por ejemplo, a la cuestión de la proporcionalidad de sanciones en el derecho indígena (incluso pequeños robos en la comunidad pueden ser sancionados con la expulsión, lo que tiene consecuencias sociales y a menudo también económicas profundas para el delincuente); así como a la definición

de los delitos penales (qué delito se considera punible y qué importancia se le atribuye, véase Brandt/Franco Valdivia 2006; 2007; Orellana H. 2004). Orellana, por ejemplo, cuenta de un caso de acoso sexual de una muchacha en una comunidad quechua en Bolivia, que en la traducción del acta del caso al castellano fue calificado como violación. Otro problema es la ponderación entre varios derechos humanos, dado que aquí se enfrentan dos categorías: los derechos humanos individuales versus los derechos humanos colectivos y culturales. La pregunta respecto a cuál tiene mayor importancia se plantea a nivel del sistema jurídico, cuando existe una garantía constitucional de la autonomía jurídica y el reconocimiento y la protección de las culturas indígenas, pero cuando al mismo tiempo los derechos humanos individuales forman parte integrante del sistema jurídico nacional y de las convenciones internacionales. Un ejemplo: ¿qué tiene un peso mayor: la libertad de culto individual o el derecho colectivo a la conservación y la observancia de la propia cultura y religión, y con ello el rechazo de otras religiones? En Colombia, la Corte Suprema dictó una sentencia que permitió a una comunidad indígena –con referencia a la garantía de la conservación de su cultura– excluir a feligreses evangélicos de la comunidad y obligarlos a abandonar la misma. En este caso, el derecho humano individual a la libertad de culto tuvo un menor peso que los derechos humanos colectivos y culturales (Kuppe 2001: 67-70 y de modo más detallado Kuppe 2000). En las comunidades indígenas, los derechos colectivos normalmente tienen prioridad sobre los derechos individuales.

La discusión sobre la prioridad en un caso conflictivo se da tanto a nivel de las instituciones jurídicas públicas como de las organizaciones indígenas. Los debates han conducido a la diferenciación de diferentes posiciones, lo que a su vez es el resultado de la interacción comunicativa entre los debates globales y los debates locales. En ello, muchos antropólogos, antropólogas y ONG jugaron un papel en la transmisión de información y de debates internacionales, pero también en la elaboración intelectual que dio lugar a la construcción posicionamientos indígenas.

Las dos posiciones –que parecen oponerse diametralmente pero que en la práctica también se influyen mutuamente y se superponen– se pueden caracterizar de la siguiente manera:

- la posición del relativismo cultural: en el discurso indianista se afirma que la cultura es algo esencialmente inalterable, algo eternamente existente. Se exige el reconocimiento total e ilimitado de los propios valores y normas “culturalmente diferentes”. Según esta comprensión estática de cultura y los derechos indígenas que se derivan de ella, los derechos colectivos se anteponen a los derechos individuales. Estas posiciones, ampliamente aceptadas en las organizaciones indígenas, también están representadas por personas externas, sean antropólogos, personal de la cooperación al desarrollo o, en ocasiones, también personal de la administración pública comprometidos con el indigenismo.
- A ello se oponen posiciones que incluyen el cambio cultural y la penetración normas y valores externos al interior de las culturas locales. En relación al derecho, enfatizan la universalidad de los derechos humanos. Ello se demuestra principalmente a nivel de los derechos de la mujer.

2. Ejemplo II: derechos de la mujer en comunidades indígenas

En 1993, en Chiapas, las mujeres indígenas del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) promulgaron su ley revolucionaria de mujeres, la misma que fue hecha pública en 1994. Bajo esta ley exigen el reconocimiento de derechos humanos fundamentales de la mujer. Este acto en sí, al igual que las exigencias, resultan realmente “revolucionarios”, dado que el documento representa una ruptura con la definición tradicional de los roles de género y con las costumbres que desfavorecen a las mujeres. Múltiples formas de desventaja forman parte no solamente de la vida cotidiana de las mujeres mayas de Chiapas, sino también de las mujeres en muchas otras culturas indígenas. Como justificación, se remite a la “tradición” de la propia cultura.

En las entrevistas a mujeres dirigentes que Cervone et al. (1998) han reunido en su estudio sobre mujeres dirigentes indígenas en Ecuador, el discurso culturalista se enfrenta a una realidad que pone muchos obstáculos en el camino para las oportunidades y el ascenso individual de la mujer. En primer lugar, está la deficiente educación escolar de las mujeres. A esto se suma la tutela masculina en la familia, bajo la cual se impide la participación de mujeres en las reuniones públicas y mucho menos los viajes o cargos de representación. En

general, las responsabilidades en el hogar y en la familia demandan gran parte del tiempo de las mujeres y no dejan espacio para dedicarse a actividades ajenas a sus “obligaciones como mujer y madre”. Asimismo, las participantes de las entrevistas enfatizan en las entrevistas la falta de modelos en el entorno de la mujer que ocupan cargos directivos. Este tipo de obstáculos surgen tanto de la construcción cultural discursiva de la identidad femenina, como de una práctica marcada por muy diversas influencias externas en el contexto postcolonial, tales como las tradiciones de la religión católica, entre otras.

En la Declaración Revolucionaria de las Mujeres de Chiapas, ellas se distancian claramente de una comprensión estática de cultura. Ello demuestra que los procesos de cambio en una relación de género definida desde lo cultural son imaginables y deseables. También existen declaraciones o posiciones con un sentido similar entre mujeres indígenas de otros Estados latinoamericanos, por ejemplo en las organizaciones de las mujeres de la Amazonia. Pese a que las mujeres de Chiapas no se refieren expresamente a la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reclaman, sin embargo, sus derechos humanos individuales y ciudadanos: la elección de su marido, la protección contra la violencia doméstica, la participación política, etc. Es evidente que estas exigencias y el enfoque sobre el cual se basan, llevan a conflictos dentro de la relación de género y también al interior de la comunidad o de las organizaciones indígenas.

No obstante, dentro de las comunidades locales también ha empezado a darse una mayor diferenciación de los discursos:

- Algunos hombres argumentan desde posiciones culturalistas y se remiten a los principios de dualidad y complementariedad, que son centrales en el pensamiento de las culturas indígenas andinas y de los mayas, e interpretan la relación de género como una relación simétrica. Por ello, afirman que las mujeres tienen el mismo poder de decisión y que ocupan una posición tan fuerte en la comunidad como los hombres. Omiten que la práctica de vida en las comunidades o en las ciudades se caracteriza por la desigualdad, dado que la vida está marcada por estructuras patriarcales, en las que las mujeres están desfavorecidas en muchos aspectos: ya sea en el acceso a la tierra, a la educación o en la representación política.

- Sin embargo, también hay hombres que sostienen argumentos a favor de las demandas emancipadoras de las mujeres y abogan por el cambio, es decir, por más derechos individuales de las mujeres.
- Adicionalmente, no es raro escuchar el argumento de que los principios culturales de la dualidad y la complementariedad deberían ser convertidos en práctica vivencial. Este argumento constituye un intento por conciliar principios culturales con la exigencia de los derechos de la mujer (si bien no en el sentido feminista, pero sí en el sentido de una renuncia a la relegación de las mujeres).

Este debate acerca de los derechos humanos y los derechos de la mujer, que provino de la discusión a nivel internacional y que fue incorporado en el contexto indígena –a través de la globalización de la comunicación–, repercutió a su vez a nivel internacional: las discusiones y argumentos de las culturas locales –no solamente de los pueblos indígenas en Latinoamérica– tienen por su parte influencias en los debates internacionales. ONG, organizaciones de las Naciones Unidas y partes de la cooperación al desarrollo internacional retoman dichos argumentos. El enfoque de tomar en cuenta las normas y prácticas culturales locales en el fomento de los derechos humanos y de la cuestión de género, es una expresión de ello. Mujeres del llamado “tercer mundo” –entre ellas también representantes de las organizaciones de mujeres indígenas– han cuidado que a nivel internacional se escuchen sus argumentos y demandas específicas. Por ello, no causa sorpresa que sean también ellas quienes sostengan argumentos controversiales respecto a los derechos de la mujer y los derechos humanos.

- Una argumentación de los indígenas, que está más bien orientada a la práctica, combina la crítica frente al feminismo occidental con las exigencias de una mayor igualdad legal de las mujeres en las comunidades indígenas. Las ideas sobre la igualdad de género y de los derechos humanos individuales, propagadas en el marco de proyectos de desarrollo, son incorporadas en los discursos de las organizaciones indígenas en tanto que combinan la exigencia con el argumento de que hay que partir de las propias normas culturales y la propia práctica, y que ésta se debe desarrollar en dirección a los derechos de la mujer y los derechos humanos. Jude Jumanga Jacinto, dirigente de la organización indígena AIDSESP (Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana), expresa

claramente esta idea cuando dice: “Somos muy conscientes de que si como mujeres no conocemos nuestros propios derechos, no podremos salir a defender todos estos derechos de los pueblos indígenas que el gobierno viene atropellando y violando. En esta toma de conciencia y en este conocimiento se ha ido capacitando a las mujeres para que puedan ocupar puestos dirigentes” (Jumanga Jacinto 2008: 83). Otro ejemplo ha sido el debate sobre los derechos de la mujer indígena y cultura entre representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSESP) en el contexto de los talleres de planificación del programa de cooperación con la agencia GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), 2000, en el que participó la autora. Si bien la cooperación al desarrollo ha recogido esta demanda formalmente, el diálogo intercultural necesario para su implementación aún está solo en sus inicios.

- Durante los preparativos para la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena 1993 y en Beijing 1995 se evidenció que, sin duda, existen fuertes controversias entre las mujeres del Norte y del Sur respecto a los derechos humanos, los derechos de la mujer y la violencia. Aquí se manifestó claramente el disenso existente desde hace ya muchos años: las mujeres no occidentales cuestionan las normas occidentales, el cómo estas últimas se manifiestan en modelos de desarrollo y en dogmas jurídicos internacionales, y rechazan a su vez toda generalización feminista. El reproche está dirigido contra la perspectiva eurocentrista tanto de las feministas como de los estudios sobre la mujer. La activista Chandra Talpade Mohanty, procedente de la India, habla de “western eyes” y “colonizing discourses” (citado en Radcliffe/Westwood 1993: 5). Algunos años más tarde, esta posición se reflejaría en los discursos de mujeres indígenas activistas del Ecuador (Prieto et al. 2005: 153-154) (véanse el análisis de los discursos en Ströbele-Gregor 2007; 2008).
- Por último, pero no por eso menos importante, existe la exigencia de igualdad por parte de las mujeres indígenas, bajo el argumento de que es necesario superar las estructuras patriarcales inscritas en la propia cultura. Así, en una entrevista que la autora condujo en 1996, una representante regional de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” afirmó: “Sí, te-

nemos nuestra cultura. Pero en cuanto a nuestros derechos de las mujeres, hay que cambiarla”. De modo similar se expresó una representante del consejo nacional de AIDSESP (Perú) en un taller de planificación realizado en el marco de una cooperación con la agencia alemana de cooperación al desarrollo GTZ en diciembre de 2000.

3. Conclusión

El derecho y las relaciones de género son dos ámbitos en los que los valores y normas culturales están inscritos de modo especial; es decir, en la definición de los roles de género y en la estructura y práctica de las relaciones de género. Como es sabido, en regiones que en otro tiempo se encontraban bajo poder colonial, el derecho es una amalgama cultural. La interacción entre los discursos globalizados, la comunicación global y las culturas locales ha conducido a la construcción y reconstrucción de normas y de la práctica cultural a nivel local. Ello se manifiesta en el debate jurídico.

Tal como lo hemos analizado en otro contexto (Feldt/Ströbele-Gregor 2008), se debe considerar que la clara delimitación entre “derecho transmitido por la costumbre” por un lado, y “normas y prácticas externas, culturalmente ajenas”, por el otro, constituye una óptica muy occidental. Cito el resultado de nuestro análisis: Si bien existe una clara diferenciación entre el derecho indígena (derecho consuetudinario) y el derecho nacional (derecho positivo),

dentro de la aplicación del Derecho Indígena, existe una cantidad de variantes que escapan de la delimitación entre endógenas y exógenas. Esto no debe confundirse con adaptación cultural. Se trata más bien de un proceso de apropiación, basado en el propio modelo cultural de pensamiento, que está conectado a la interacción entre culturas, y que se manifiesta no sólo en el ámbito jurídico, sino también en la relación entre los géneros, o en las formas autónomas de participación en la representación política. Por eso, la autodeterminación indígena no excluye necesariamente el reconocimiento de, al menos, algunos derechos humanos individuales (p. ej.: el derecho a la integridad física en la familia); aunque los derechos individuales se mantienen supeditados a los derechos colectivos (Feldt/Ströbele-Gregor 2008: 28).

En la reconstrucción del derecho indígena, la comunicación globalizada juega un rol central. A través de la Internet, en reuniones regionales y continentales de las organizaciones indígenas, así como en los pro-

yectos de desarrollo, no solamente tiene lugar el intercambio con otros pueblos indígenas, sino que también se refuerza el acceso al debate internacional y el intercambio, particularmente con actores de la ciencia y de la política de desarrollo.

Como siempre ocurre en el proceso de comunicación, se produce una dinámica de interacción entre los actores, que permite nuevas perspectivas y/o una mayor diferenciación de los argumentos en ambos lados. De esta manera,

los procesos de transformación en estos ámbitos no solamente tienen lugar en los pueblos indígenas. La diferenciación de discursos y conceptos valorativos se efectúan en el marco de la interacción global, también en el occidente y en el norte, influenciadas por las experiencias y los argumentos críticos del sur, o sea, también de indígenas (Feldt/Ströbele-Gregor 2008: 28).

Paralelamente al desarrollo a nivel local, se puede discernir una mayor diferenciación de los discursos y de la práctica en instituciones nacionales e internacionales, es decir, en instituciones que actúan a nivel global.

Un ejemplo en el ámbito jurídico es el mencionado debate de los derechos de la mujer. La crítica de las mujeres del sur, incluyendo a las mujeres indígenas, al feminismo occidental ha contribuido a la autorreflexión y a la ampliación de los enfoques teóricos a nivel internacional. Y la diferenciación entre derechos humanos políticos, sociales y culturales, definitivamente recibió incentivos de los actores del sur, entre ellos de los indígenas de Latinoamérica (Feldt/Ströbele-Gregor 2008: 28).

Desde los años 1960, los artículos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fueron introducidos a partir de las observaciones y reivindicaciones de diferentes actores del sur y, en la actualidad, son los fundamentos para el reconocimiento, por ejemplo, de conceptos tan importantes como son los derechos colectivos. Pero no debe pasarse por alto que ya en la versión de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, el Artículo 17 reconoce el derecho comunitario; Art. 18, reconoce el derecho a practicar comunitariamente la religión; y Art. 29 hace énfasis en las obligaciones del individuo respecto a la comunidad, como así también en la limitación de todos los derechos, para asegurar que no se vulneren los derechos de los demás (Kalny 2008). La Declaración de las Naciones Unidas de los derechos económicos, sociales y culturales (1966), la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas

pertenecientes a minorías étnicas, religiosas e idiomáticas” (1992), la Declaración de Río de Janeiro de 1992, en especial los Art. 22 y 23, así como las declaraciones y resoluciones sobre los derechos humanos de “Tercera Generación” son claramente resultado de las intervenciones de los pueblos no-occidentales, entre ellos los pueblos indígenas. Sin embargo, entre los pueblos indígenas, sobre todo a nivel de los activistas políticos, está muy difundido el argumento que los derechos humanos universales están fundamentadas en los valores de la cultura occidental, por eso su reconocimiento a nivel universal sería someterse a una cultura ajena a la propia.

Las tensiones entre cultura – universalidad de los derechos humanos, así como entre derechos humanos individuales y derechos colectivos –y con ello la cuestión de los conceptos de cultura o de “tradición cultural”–, son aspectos de una discusión necesaria, tanto a nivel local como a nivel global. Los debates existentes y aún pendientes muestran que la globalización sin duda puede abrir nuevas y fructuosas perspectivas para todos los involucrados y que este proceso no necesariamente conduce a la destrucción de las culturas indígenas. Más bien abre posibilidades –por lo menos en el ámbito del derecho– para que las culturas locales estén en condiciones de trazar procesos de cambio de manera más consciente.

Bibliografía

- Brandt, Hans-Jürgen/Franco Valdivia, Rocío (eds.) (2006): *El tratamiento de conflictos. Un estudio de actas en 133 comunidades* (Serie: Justicia comunitaria en los Andes: Perú y Ecuador). Lima: IDL – Instituto de Defensa Legal.
- (eds.) (2007): *Normas, valores y procedimientos en la justicia comunitaria* (Serie: Justicia comunitaria en los Andes: Perú y Ecuador). Lima: IDL – Instituto de Defensa Legal.
- Cervone, Emma et al. (ed.) (1998): *Mujeres contracorriente: voces de líderes indígenas*. Quito: CEPLAES.
- EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) (ed.) (1993): Leyes de guerra. Capítulo “Ley Revolucionaria de Mujeres”. En: *El despertador Mexicano, Órgano Informativo del EZLN, México, 01.12.1993*. Reedición en: Quezada, Marcelo/ Pérez-Ruiz, Maya Lorena (1998): *EZLN-la utopía armada – una visión plural del movimiento zapatista*. La Paz: Plural, pp. 49-50.
- Feldt, Heidi/Ströbele-Gregor, Juliana (2008): “Pueblos Indígenas y Conflicto”. En: GTZ (ed.): *Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en Latinoamérica –*

- PROINDIGENA* —. Eschborn: GTZ (Julio de 2008), y <www.gtz.de> (18 de Octubre de 2008).
- Jumanga Jacinto, Jude (2008): “Sobre capacitación en derechos de las mujeres indígenas (dirigentes) en Perú”. En: Sevilla, Rafael/Ströbele-Gregor, Juliana (eds.): *Pueblos Indígenas – Derechos, estrategias económicas y desarrollo con identidad*. Edición Foro de Desarrollo. Bad Honnef: Horlemann, pp. 82-85.
- Kalny, Eva (2008): “Der ‘Westen’ und die Menschenrechte. Abschied vom Ursprungsmythos einer Idee”. En: *Peripherie*, 109/110, pp. 196-223.
- Kuppe, René (2000): “Religionsfreiheit und Schutz der kulturellen Identität im Widerspruch? Die Erkenntnis SU-510/1998 des Verfassungsgerichtes Kolumbiens”. En: *Österreichisches Archiv für Recht und Religion*, 1, pp. 48-81.
- (2001): “Die Anerkennung indigener Rechtsautonomie im interkulturellen Spannungsfeld”. En: Borsdorf, Axel/Klömer, Gertrud/Pranreiter, Christof (eds.): *Lateinamerika im Umbruch: Geistige Strömungen im Globalisierungsstress, Innsbrucker Geographische Studien*. Innsbruck: Institut für Geographie der Universität Innsbruck, 32, pp. 61-76.
- Orellana H., René (2004): *Interlegalidad y Campos Jurídicos. Discurso y derecho en la configuración de órdenes semiautónomos en comunidades quechuas de Bolivia*. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Cochabamba: Huella Editores.
- Prieto, Mercedes/Cumani, Clorinda/Flores, Alejandra/Maldonado, Gina/Pequeño, Andrea (2005): *Respeto, discriminación y violencia: mujeres indígenas en Ecuador 1990-2004*. Quito: FLACSO.
- Radcliffe, Sarah A./Westwood, Sallie (eds.) (1993): “VIVA”. *Women and Popular Protest in Latin America*. London/New York: Routledge.
- Ströbele-Gregor, Juliana (2007): “Mujeres indígenas y Ciudadanía, y Alcance del derecho. Estado de la investigación tomando como ejemplo Ecuador”. OBREAL/EULARO conference papers <www.obreal.unibo.it/Publications.aspx?Action=Search&IdPublicationType=7>.
- (2008): “Ciudadanía y mujeres indígenas – El debate en Ecuador”. En: Kron, Stefanie/Noack, Karoline (eds.): *¿Qué género tiene el derecho? Ciudadanía, historia, globalización* (Serie: Fragmentierte Moderne in Lateinamerika). Berlin: edition tranvía, pp. 143-169.